

ORGANIZADO POR



CON EL APOYO DE



FORO CÚCUTA

F O R O D E L A S O C I E D A D C I V I L
L A T I N O A M E R I C A N A Y C A R I B E Ñ A
P A R A L A P R E V E N C I Ó N D E
A T R O C I D A D E S M A S I V A S

P A Í S E S A N D I N O S

El siguiente documento recoge las discusiones y tópicos abordados en el marco de los Talleres Subregionales desarrollados en el Foro de la Sociedad Civil Latinoamericana y Caribeña para la Prevención de Atrocidades Masivas (Foro Cúcuta).

En el marco del Foro Cúcuta, coorganizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) y el Stanley Center for Peace and Security, el objetivo principal ha sido reunir a miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos para ofrecer un espacio que permite la construcción de redes, fortalecer y generar herramientas que son necesarias para el desarrollo del trabajo diario de los participantes del Foro y generar recomendaciones que promuevan mayor conciencia sobre los riesgos presentes

en tres subregiones de América Latina y el Caribe: América Central, los Países Andinos y el Cono Sur. Sobre la base del Marco de Análisis para Crímenes Atroces elaborado por las Naciones Unidas en el año 2014, circulado previamente a los participantes, el trabajo en pequeños comités subregionales tuvo como fin, a partir del análisis sobre problemáticas regionales, enfocar específicamente en aquellas tendencias y situaciones subyacentes referentes a las subregiones, para avanzar luego en el abordaje conjunto del diseño de estrategias y acciones, tanto regionales como locales, para la construcción de resiliencia y la prevención de atrocidades masivas.

CONTEXTO

El 23 de junio de 2021, se llevó a cabo el Tercer Taller Subregional que abordó el análisis de la prevención de atrocidades masivas en los Países Andinos. En la última década estos países han sufrido grandes conmociones a nivel social y estructural producto de años de desatenciones estatales, falta de institucionalidad, narcotráfico, pobreza extrema, corrupción, gobiernos autoritarios que se han perpetuado en el poder, entre otras problemáticas que han impedido que estos países logren superar estos desafíos para ser menos excluyentes y más equitativos.

En octubre del 2019, el descontento social llevó a miles de personas a manifestarse en diferentes partes del mundo. En la Región Andina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela enfrentaron protestas por distintas razones, con tintes violentos que han dejado dejado personas fallecidas, heridos y destrucción. Entre las razones que han motivado las manifestaciones están: la falta de reconocimiento de derechos, la subida de los precios de los productos y servicios básicos, las altas tasas de desempleo, el asesinato de líderes sociales, las discrepancias políticas, entre otras.

El estallido social chileno dejó un saldo de 36 muertes por las protestas realizadas entre octubre del 2019 a marzo del 2020. A pesar que este estallido fue producto, a priori, por el alza en las tarifas del transporte público, varias organizaciones sociales y grupos ciudadanos se sumaron al malestar social deviniendo en el cambio de la Constitución chilena. Las protestas produjeron una gran cantidad de denuncias de abuso de fuerza por parte de militares y policías. De la misma forma, las acusaciones de represión e intentos de autoritarismo, fueron dirigidas hacia los altos funcionarios del Estado Chileno debido a las medidas impuestas a los ciudadanos para evitar el estallido social.

Un caso similar se presentó en Bolivia, luego que los partidos opositores al entonces presidente, Evo Morales del partido MAS, acusaran a su gobierno de llevar a cabo elecciones fraudulentas por una interrupción de más de 24 horas en el conteo de votos. Los ciudadanos y partidos políticos reclamaron en las calles el recuento de votos que resultó en una segunda vuelta electoral. Estas protestas, dieron como resultado la renuncia de Evo Morales. Los simpatizantes del expresidente salieron a las calles afirmando que presidenta interina, Jeanine Añez, cabeza temporal del gobierno, estaba instaurando un régimen en contra de las creencias pluralistas de los pueblos indígenas bolivianos y que, representaba a una parte de la población racista y clasista que quería tomar el poder. Durante estos últimos enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los protestantes se produjeron mas de una decena de detenciones arbitrarias, cientos de heridos y aproximadamente de cinco fallecidos.

En Ecuador del 3 al 13 de octubre del 2019 se registraron protestas de distintos grupos sociales: indígenas,

transportistas, estudiantes, trabajadores, entre otros, que protestaron en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decretado por el presidente Lenín Moreno en respuesta a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tras un decreto del estado de excepción, un toque de queda y once días de manifestaciones, consentradas mayormente en Quito, Moreno suspendió la medida y llegó a un acuerdo para dialogar con varios sectores de la sociedad antes de establecer una política de focalización de subsidios a los combustibles. Las protestas dejaron 10 personas fallecidas y más de 1.340 heridos.

En Colombia, varios sectores sociales se unieron para expresar su descontento en torno a la presidencia de Iván Duque por distintas razones entre las que se encuentran: la reforma tributaria, la falta de protección hacia los líderes sociales del país, el manejo del gobierno del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP y los intentos por derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), casos corrupción gubernamental y, las políticas ambientales adoptadas. Se registraron múltiples denuncias por allanamientos a centros periodísticos independientes y organizaciones sociales. Las jornadas de protestas duraron dos meses, hasta febrero del 2020, se denunciaron detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Anti-Disturbios. También se presentaron denuncias por criminalización de la protesta por parte de los dirigentes políticos. Estas protestas han dejado saldos de miles de personas heridas entre uniformados y manifestantes, casi dos centenares de casos de violencia contra periodistas, miles de personas desaparecidas durante este tiempo y 100 muertes de civiles.

En el caso venezolano, los constantes levantamientos en contra del régimen de Nicolás Maduro, así como los éxodos masivos de sus habitantes por la crisis política, económica e institucional que atraviesa este país, han causado graves conflictos que se agravan con la falta de capacidad del manejo migratorio por parte de los países latinoamericanos, que han recibido a miles de venezolanos en su territorio. Por otro lado, Venezuela continúa sumida en la pobreza extrema, presentando hiperinflación y cierre de fronteras. Los mercados ilegales de tránsito de personas en las fronteras con Colombia, Ecuador, Perú y Brasil agudizan el frágil estado migratorio de aquellos que se ven obligados a abandonar su país de origen. Además, los enfrentamientos en la frontera con Colombia contra actores armados ilegales tienen cercados a aquellos que deciden quedarse.

La problemática explicada se suma la pandemia global causada por el Covid-19 que requirió la redirección de fondos públicos para enfrentar la emergencia sanitaria produciendo graves consecuencias como altos índices de desigualdad, incapacidad de acceder a derechos básicos y, protestas sociales por el manejo de la crisis sanitaria por parte de los gobiernos.

FACTORES DE RIESGO COMUNES

En base al Marco de Análisis para Crímenes Atroces, en el taller se identificaron factores comunes en los países andinos que pueden generar un entorno en el cual la escalada de violencia genere mayor probabilidad de que se cometan crímenes atroces. Algunos de estos factores son estructurales pero otros están relacionados con acontecimientos específicos que han ocasionado conflictos sociales con gran repercusión en la región andina.

F1

Situaciones de conflicto armado u otras formas de inestabilidad

F3

Debilidad de las estructuras del Estado

F5

Capacidad para cometer crímenes atroces

F7

Circunstancias propicias o acciones preparatorias

F9

Tensiones intergrupales o patrones de discriminación contra grupos protegidos

F11

Indicios de ataque generalizado o sistémico contra una población civil

F14

Graves amenazas contra las operaciones humanitarias u OMP

SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO U OTRAS FORMAS DE INESTABILIDAD

Los participantes del taller consideran que algunos de los factores estructurales de los países andinos son: la incapacidad de redistribuir los recursos de manera adecuada para que sus habitantes puedan gozar de los beneficios básicos, la falta de oportunidades laborales, la fragilidad institucional, la inestabilidad política, la corrupción y el mal manejo de la economía pre, durante y post pandemia del Covid -19. Estos factores han generado desigualdad y democracias con poca confiabilidad por parte de sus ciudadanos.

Además, en el taller se corroboró que uno de los factores de riesgo preeminentes lo constituía la prevalencia de mercados ilegales y su vínculo con la pobreza. En relación con este punto se discutió sobre la basta relación entre esta actividad ilícita como una forma de salida fácil de las adversidades ocasionadas por las desigualdades estructurales y la falta de compromiso político en dar una solución más allá del prohibicionismo y la criminalización de los consumidores.

La influencia del narcotráfico se puede observar en toda la subregión. Los enfrentamientos por territorios, rutas para circular la droga, el control del mercado interno y el lavado de dinero hacen de secciones de territorios, campos de batalla. La evolución de estructuras guerrilleras y paramilitares a narcotraficantes (en el caso de Colombia) la expansión de los cultivos ilegales y la especialización en la producción hacen que cada día sea más difícil acabar de alguna forma con el problema que significa el narcotráfico. Existen comunidades donde se ha permeado la cultura y se da paso a la llamada "narco cultura" que sobrevalora la capacidad de tener posesiones materiales y extravagantes por encima de la vida misma. Incluso esto ha significado la reinvención de tácticas estatales para combatir el fenómeno del narcotráfico conjuntamente con otros países, como sucede entre Colombia y Ecuador donde el conflicto ha logrado traspasar fronteras y generar crisis en las poblaciones fronterizas.

DEBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO

Los regímenes de gobierno autoritarios que permanecieron en los últimos años en la mayoría de países andinos han debilitado tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil. Por esta razón la sociedad civil de los países andinos enfrenta grandes retos tanto para superar su fragmentación como para recuperar su participación ciudadana como un actor importante en la esfera pública.

Además, la fragilidad institucional ha generado caminos para que los grupos armados ilegales y los narcotraficantes generen Estados paralelos que implementan funciones que le corresponderían al Estado como lo es la protección, la justicia, el asegurar trabajo y pro-

veer de comida. Situación que se agravó con la llegada de la pandemia y el mal manejo de esta crisis sanitaria.

Toda esta situación y ciertos factores específicos de cada país han ocasionado un malestar, indignación e inconformidad en la población de los países andinos, hasta el punto de llevarlos a las protestas sociales, mencionadas anteriormente. Las protestas sociales en la mayoría de países andinos han recibido respuestas gubernamentales poco estratégicas con procesos de diálogo impositivos que han elevado el nivel del conflicto, presentando un represión en la que es común el exceso del uso de la fuerza, junto a la criminalización de la protesta.

CAPACIDAD PARA COMETER CRÍMENES ATROCES

En todos los casos mencionados se evidencia la poca capacidad de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, sumado a un espacio cívico en retracción. El uso excesivo de la fuerza para apaciguar la protesta social, llevó no solo a detenciones y represalias contra líderes sociales sino al uso de grupos armados que con supuestas armas “no letales” causaron numerosos muertos y heridos.

Los participantes de Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela identificaron la presencia de grupos armados en las protestas, cuya procedencia no se puede determinar claramente, que generaron inestabilidad y violencia en las calles polarizando a los actores e incrementando el nivel de conflictividad. A pesar de que tanto los gobiernos como los sectores de sociedad civil

manifestaron que estos grupos no pertenecían a sus bandos, en ningún país se ha tomado ninguna medida para identificar y sancionar debidamente esta actuación. Estas acciones se suman a la falta de juicios a los actores que han cometido delitos y abusos en los levantamientos sociales.

A esto se le suma la necesidad de una reforma judicial en la región que implemente un sistema transparente y libre de corrupción. Además, los participantes consideran que aunque la seguridad ciudadana es importante, los abusos de fuerza y el uso de armas “no letales” generan fracturas en la capacidad de acceso a la participación e incidencia por parte de la sociedad civil.

FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICO

Considerando los factores de riesgo común explicados anteriormente, existen tres factores de riesgo específico que fueron identificados por los participantes del taller y que deben considerarse: (1) las tensiones entre el gobierno y distintos sectores de la población civil, (2) el ataque generalizado contra la población civil y, (3) las amenazas contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

TENSIONES ENTRE EL GOBIERNO Y DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ATAQUES GENERALIZADOS CONTRA DIVERSOS ACTORES DE LA POBLACIÓN CIVIL

En los países de la región andina las tensiones que generan los conflictos, las desigualdades o la persecución de intereses propios por parte de los dirigentes políticos han causado rupturas dentro del tejido social que cada vez son más difíciles de arreglar. Entre los factores de riesgo específico encontramos que la región carece de mecanismos o iniciativas nacionales para el manejo de tensiones o conflictos entre los diversos actores de la esfera pública y, en especial entre el gobierno, la ciudadanía y los partidos políticos.

En el caso de Bolivia, se puede observar como el proceso electoral responde a las lógicas de poder de los gobiernos de turno careciendo de transparencia. Este

factor también se ha presentado en otros países de la región, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar sistemas abiertos que garanticen un proceso electoral independiente y claro.

Por otro lado, en países como Ecuador y Perú la sociedad civil ha identificado la necesidad de fortalecerse como sector para poder incidir y llevar una voz ciudadana en la agenda gubernamental, evitando que la tensión con el gobierno se vuelva a convertir en un conflicto social incontrolable, sin embargo, se necesitan estrategias y herramientas necesarias para lograr este objetivo y, sobre todo, para el manejo del tema de la interculturalidad.

Específicamente en Colombia, los ataques a los exintegrantes de las FARC-EP dentro de las zonas delimitadas para la reintegración a la sociedad luego de la firma de paz, se enmarca dentro de un factor de riesgo específico que debe considerarse pues ha dejado un saldo de cerca de 250 personas asesinadas. Un panorama muy similar al de los líderes sociales que acompañan el acuerdo y encabezan las iniciativas para traer el desarrollo a zonas rurales y pobres de Colombia, que deja un saldo aproximado de 1200 líderes asesinados desde la firma del acuerdo.

En cada país existen particularidades dentro de los conflictos y las amenazas a ciertos grupos, estos ejemplos denotan la complejidad de cada caso, lo que dificulta identificar la dinámica de los conflictos y generar recomendaciones para instaurar procesos de solución más viables y humanos.

AMENAZAS CONTRA PERSONAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Los participantes señalaron que los conflictos basados en la identidad y la interculturalidad han aumentado en la región andina. En otros casos como el de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, se vulneró el derecho a la protesta durante los estallidos sociales presentándose ataques directos periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes indígenas, entre otros, además de judicializar la protesta social.

En el caso de Venezuela, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por mantener al margen cualquier tipo de atrocidades cometidas, abusos de autoridad o uso de la fuerza a la gran cantidad de ciudadanos que han salido del país, el gobierno no reconoce

la emergencia humanitaria. Esta situación a puesto en peligro tanto a los defensores de derechos humanos como a las organizaciones no gubernamentales que han sido presionadas y hostigadas de diversas formas lo que convierte al trabajo humanitario no solo en peligroso sino en extremadamente difícil.

Como se ha podido evidenciar las amenazas contra los defensores de derechos humanos y las misiones humanitarias están presentes sin importar ideologías políticas o situaciones de presunta estabilidad. El trabajar por dar espacio a la transparencia y veeduría sin que se corran riesgos es fundamental para avanzar en la consecución del desarrollo social.

RECOMENDACIONES

- Generar mecanismos que abran espacios de diálogo dentro de los distintos grupos sociales con el objetivo de esclarecer sus demandas y generar estrategias de incidencia en la política pública.
- Desarrollar capacidades de diálogo en las bases poblacionales para lograr identificar demandas y crear hojas de ruta para solventar los conflictos suscitados en los últimos años.
- Dar prioridad al empoderamiento de a la sociedad civil en lugar de los grupos policiales y militares pues estos grupos necesitan aprender a manejar conflictos sin violencia para evitar su escalada y tener una intervención más acertada.
- Los países andinos requieren un nuevo proceso de reformas judiciales que recuperen la confianza de la ciudadanía y den respuesta a las demandas de justicia por parte de los distintos actores de la sociedad.
- Apoyar la regularización de los emigrantes venezolanos en los distintos países andinos en los que se encuentran para estabilizar esta problemática y evitar problemas de represión y xenofobia.
- Los países andinos necesitan desarrollar estrategias de generación de empleo que permita mejorar la situación de sus ciudadanos a la vez que se incorpora a los migrantes venezolanos.
- Protección a los líderes sociales en su función de la defensa de los derechos humanos y su labor con la población a la que pertenecen.
- Buscar medidas alternativas para la lucha contra el narcotráfico más allá del prohibicionismo, como herramienta para controlar y disminuir el impacto negativo que este tiene en la sociedad.
- Desarrollar proyectos que busquen mitigar los daños causados por la pandemia del COVID-19 y reactivar la economía para atender las demandas sociales.
- Realizar ajustes en la legislación y tomar medidas que eviten la criminalización de las protestas para evitar la escalada de conflictos.
- Responsabilizar y tomar medidas disciplinarias contra aquellos miembros de las fuerzas públicas a quienes se les haya comprobado que abusaron de su autoridad.